



## Cuarta revisión a México del Examen Periódico Universal 2024 Empresas y Derechos Humanos

### Resumen de la problemática en México

Desde la tercera revisión al Estado mexicano, las organizaciones de la sociedad civil mexicanas hemos informado al Consejo de Derechos Humanos sobre la impunidad corporativa, así como los múltiples abusos y violaciones a derechos humanos por los impactos de la actividad empresarial pública, privada y mixta en el país. Ante tales circunstancias, identificamos que nuestro marco jurídico es ambiguo ante la falta de estrategias que especifique y aclare las obligaciones de respetar los derechos humanos por parte de las propias empresas más allá de sus relaciones comerciales con el Estado. Sucede lo mismo en el caso de inversionistas institucionales en toda actividad pública, privada y mixta, nacional y transnacional, situación que ha privilegiado la impunidad.

México ha ratificado múltiples Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, así como comenzado la implementación de estándares internacionales como los Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos; sin embargo, ese compromiso internacional no se ha traducido en la armonización del marco jurídico que permita prevenir y mitigar afectaciones a los derechos humanos, incluyendo al medio ambiente sano, así como abordar y reparar las mismas cuando llegan a suceder, y también aplicar sanciones pertinentes y proporcionales por dicho daño y por la falta de cumplimiento del bloque constitucional respecto a los derechos humanos. Con la llegada del nuevo gobierno se anunció la construcción de megaproyectos en el sureste y centro del país, entre ellos están el Tren Maya, el Corredor del Istmo de Tehuantepec y los gasoductos de Morelos como insignia del sexenio (2018-2024). En estos grandes proyectos de inversión de capital público y privado nacional e internacional para el supuesto desarrollo de las comunidades o la mejora de la infraestructura física y que implica la transformación a largo plazo de las actividades productivas, cambios en el uso de la tierra y de los derechos de propiedad, pero a costa

de la vida digna, ecocidio, de la libre determinación, entre otros.

Asimismo, las personas titulares de derechos y comunidades afectadas por las actividades empresariales vieron continuar la impunidad corporativa frente a sus impactos y la falta de acceso al derecho a la justicia, reparación y no repetición en múltiples casos, por ejemplo, el caso de los Comités de Cuenca en Sonora<sup>1</sup>, quienes desde 2014 continúan en proceso legal que les permita acceder a una reparación integral y que la empresa responsable derrame material tóxico en su territorio se responsabilice por las violaciones a derechos humanos.

El Estado mexicano carece del marco jurídico vinculante para poner fin a la captura corporativa de este, acabar con la impunidad de las empresas que causaron daños o están vinculadas a estos y crear mecanismos eficaces para remediar y reparar integralmente a las comunidades y personas afectadas por las actividades de las empresas transnacionales, incluidas las que operan en las industrias extractivas, financieras, alimentarias, sanitarias, tecnológicas, entre otras.

Finalmente, el sistema financiero mexicano no ha adoptado un marco de respeto a los derechos humanos de manera transversal de forma particular que permita que las instituciones que otorgan créditos, financiamientos o que inviertan en proyectos empresariales tengan mecanismos para identificar riesgos de posibles impactos a los derechos humanos que puedan tener dichos proyectos, y actividades empresariales que estén relacionadas con ellos, para abordar los que sucedan, identificar su responsabilidad o corresponsabilidad y reparar dichos daños. Todo ello desarrollado, monitoreado, y evaluado a través de la participación de las personas titulares de derechos.

<sup>1</sup> <https://comitescuencariosonora.wordpress.com/2023/05/22/tribunal-colegiado-da-la-razon-a-las-comunidades-del-rio-sonora-en-el-caso-de-la-megapresa-de-jales/>



## Recomendaciones que el Estado mexicano puede adoptar para abordar esta temática:

1. El Estado deberá desarrollar el marco regulatorio, en consulta con las personas titulares de derechos y la sociedad civil, sobre la responsabilidad jurídica corporativa incluyendo la debida diligencia en derechos humanos con los mecanismos efectivos para prevenir las violaciones a derechos humanos, y para la reparación integral del daño en las actividades públicas, privadas y mixtas; así como dar prioridad a aquéllas empresas que cumplan con este marco regulatorio y con mecanismos de debida diligencia en derechos humanos y ambiental para participar y obtener procesos de licitación, adjudicación y contratación con el Estado.

2. Trabajar con las autoridades judiciales para crear los ajustes necesarios que permitan a las personas titulares de derechos acceder a los mecanismos jurisdiccionales cuando las empresas abusen de sus derechos humanos, considerando la representación jurídica, intérpretes y con perspectiva de género, intercultural e interseccional.

3. El Estado mexicano deberá regular efectivamente el lobby corporativo para beneficio de los capitales privados y que dañe los derechos humanos, el medio ambiente y el clima, mismo que perpetúa la opacidad.

4. Desarrollar un mecanismo de implementación de sistemas de protección de los derechos humanos de manera transversal en el sistema financiero mexicano con participación efectiva de titulares de derechos en el desarrollo, monitoreo y evaluación del mismo.

5. El Estado mexicano deberá seguir participando activamente en las sesiones de desarrollo del texto del instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos

humanos<sup>2</sup>, elaborando su posición en consulta con las partes interesadas, particularmente, con las personas titulares de derechos y afectadas por la actividad empresarial así como con la sociedad civil especializada.

6. Crear e implementar un marco jurídico, administrativo y judicial para que obligue y en su caso sancione a las empresas estatales, así como a mantener una transparencia activa que permita visualizar las acciones de prevención, mitigación y reparación las posibles violaciones a derechos humanos y su abordaje efectivo en caso de daños causados.

7. Establecer que la consulta no es un fin en sí mismo sino un medio para ejercer su libre determinación, participar en el diseño de políticas públicas que se aplican en sus comunidades y territorios, y vivir según sus propios sistemas sociales, culturales, normativos, y económicos, en un país pluricultural.

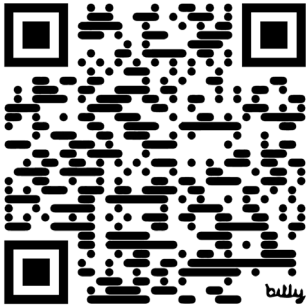
8. En las investigaciones de delitos y/o violaciones de derechos humanos contra personas defensoras, siempre se deberá implementar una línea de investigación considerando la actividad de defensa de derechos humanos. La agresión no debe ser considerada como un hecho aislado.

9. Proteger y garantizar los derechos humanos al agua, al medio ambiente sano y a la salud tomando todas las medidas necesarias de carácter precautorio, legal, económico y de política pública para evitar que las fuentes de agua sean sobreexplotadas y contaminadas por actividades industriales, extractivas y agroindustriales, y asegurando que los actores estatales y no estatales prevengan los daños ambientales severos e irreversibles que repercuten en otros derechos humanos y se responsabilicen de la reparación integral del daño.

<sup>2</sup> <https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/wg-trans-corp/igwg-on-tnc>



Informe completo:



## Datos de Contacto:

### **Ivette González**

Directora de Vinculación Estratégica e  
Incidencia

Proyecto sobre Organización, Desarrollo,  
Educación e Investigación (PODER)

*igo@poderlatam.org*

Tel. 5207-3392

### **Zúe Valenzuela**

Oficial de Vinculación Estratégica e Incidencia

Proyecto sobre Organización, Desarrollo,  
Educación e Investigación (PODER)

*zvc@poderlatam.org*

Tel. 5207-3392



## Fourth Universal Periodic Review 2024 to Mexico Business and Human Rights

### Summary of the problems in Mexico

Since the third review of the Mexican State, Mexican civil society organizations have informed the Human Rights Council about corporate impunity, as well as the multiple abuses and human rights violations due to the impact of state, private and mixed business activity in the country. Under these circumstances, we identified that our legal framework is ambiguous due to the lack of strategies that specify and clarify the obligations to respect human rights by the companies themselves beyond their commercial relations with the State. The same happens in the case of institutional investors in all state, private and mixed, national and transnational activities, a situation that has favored impunity.

The Mexican State has ratified multiple international treaties on human rights, and has worked to adopt international standards such as the UN Guiding Principles on Business and Human Rights; however, this international commitment has not been translated into the harmonization of the legal framework to prevent and mitigate human rights violations, including the right to healthy environment; into addressing and repairing damages when they occur; and also into applying pertinent and proportional sanctions for such damages and for the lack of compliance with the constitutional block regarding human rights.

With the arrival of the new government, the construction of mega-projects in the southeast and center of the country were announced. Among them are the Mayan Train, the Isthmus of Tehuantepec Corridor and the Morelos gas pipelines as the flagship of the six-year term (2018-2024). In these large investment projects of national and international state and private capital for the supposed development of communities or the improvement of physical infrastructure and involving the long-term transformation of productive activities, changes in land use and property rights, but at

the cost of dignified life, ecocide, self-determination, among others.

Likewise, rights holders and communities affected by corporate activities saw corporate impunity continue in the face of their impacts and the lack of access to the right to justice, reparation and non-repetition in multiple cases, for example, the case of the *Comités de Cuenca in Sonora*<sup>1</sup>, rural communities who, since 2014, have been pursuing legal proceedings that would allow them to access comprehensive reparation, and that the company responsible for the toxic spill in their territory be held accountable for the human rights violations.

The Mexican State lacks a binding legal framework to put an end to corporate capture of the State, end impunity for companies that caused damages or are linked to these damages, and create effective mechanisms to remedy and provide comprehensive reparations to communities and individuals affected by the activities of transnational corporations, including those operating in the extractive, financial, food, health, and technology industries, among others.

Finally, the Mexican financial system has not adopted a framework of respect for human rights in a cross-cutting manner that would allow: for institutions that grant loans, financing or invest in business projects to have mechanisms for risk identification of possible human rights impacts that such projects, as well as business activities that are related to them, may have; to address those that occur, identify their responsibility or co-responsibility, and repair such damage. All of the later should be developed, monitored, and evaluated with and through the participation of rights holders and victims.

<sup>1</sup> <https://comitescuencariosonora.wordpress.com/2023/05/22/tribunal-colegiado-da-la-razon-a-las-comunidades-del-rio-sonora-en-el-caso-de-la-megapresa-de-jales/>

## Recommendations that the Mexican State can adopt to address this issue:

1. The State should develop the regulatory framework, in consultation with rights holders and civil society, on corporate legal responsibility including human rights due diligence with effective mechanisms to prevent human rights violations, and for the integral reparation of damages in state, private and mixed activities; as well as give priority to those companies that comply with this regulatory framework and with human rights and environmental due diligence mechanisms to participate and obtain bidding, awarding and contracting processes with the State.

2. Work with judicial authorities to create the necessary adjustments that allow rights holders to access jurisdictional mechanisms when companies abuse their human rights, considering legal representation, interpreters and with a gender, intercultural and intersectional perspective.

3. The Mexican State should effectively regulate corporate lobbying solely for the benefit of private capital that harms human rights, the environment and the climate, which perpetuates opacity.

4. Develop a mechanism to implement human rights protection systems in a cross-cutting manner in the Mexican financial system with effective participation of rights holders in its development, monitoring and evaluation.

5. The Mexican State should continue to actively participate in the negotiations of the text of the legally binding instrument to regulate the activities of transnational corporations and other business enterprises in international human rights law<sup>2</sup>, elaborating its position in consultation with interested parties, particularly with rights holders and persons

affected by business activity, as well as with specialized civil society.

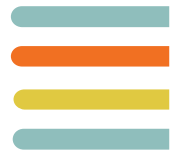
6. Create and implement a legal, administrative and judicial framework to oblige and, if necessary, sanction state-owned companies, as well as to maintain active transparency that allows visualizing the actions of prevention, mitigation and reparation of possible violations of human rights and its effective approach in case of damages caused.

7. Establish that consultation of projects is not an end in itself but a means to exercise indigenous and rural and peasant communities self-determination, participate in the design of state policies that could be applied in their communities and territories, and live according to their own social, cultural, normative, and economic systems in a multicultural country.

8. In the investigation of crimes and/or human rights violations against human rights defenders, a line of investigation should always be implemented considering the activity of human rights defense. The aggression should not be considered as an isolated event.

9. Protect and guarantee the human rights to water, to a healthy, clean and sustainable environment, and to health by taking all necessary precautionary, legal, economic and state policy measures to prevent water sources from being overexploited and contaminated by industrial, extractive and agro-industrial activities, and ensuring that state and non-state actors prevent severe and irreversible environmental damage that impacts other human rights and take responsibility for the full reparation of the damage.

<sup>2</sup> <https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/wg-trans-corp/igwg-on-tnc>



Full report:



## Contact Information:

### **Ivette González**

Strategic Engagement and Advocacy Director  
Project on Organizing, Development, Education  
and Research (PODER)

*igo@poderlatam.org*

Tel. 5207-3392

### **Zúe Valenzuela**

Strategic Engagement and Advocacy Officer  
Project on Organizing, Development, Education  
and Research (PODER)

*zvc@poderlatam.org*

Tel. 5207-3392

